



ANTE LA CRISIS, MÁS CIUDADANÍA

QUEREMOS EL MADRID DE LAS PERSONAS

Las personas que representamos a las organizaciones sociales, movimientos, plataformas, asociaciones y sindicatos de la Comunidad de Madrid reunidos el 17 de octubre a convocatoria de la Cumbre Social de Madrid, en nuestra reivindicación de la defensa de los Derechos de Ciudadanía, queremos, en primer lugar, felicitarnos por la intensa movilización de amplios sectores de nuestra sociedad en defensa del derecho a la salud que ha permitido que hoy los planes de privatización de hospitales y centros sanitarios se encuentren suspendidos. En el mismo sentido, llamamos a redoblar esfuerzos para que la campaña de movilizaciones y consulta lanzadas por la comunidad educativa y su marea verde contra el ataque al derecho a la educación sea, junto a la huelga del día 24, un nuevo éxito.

Estamos inmersos en una crisis que trasciende lo económico. Desde que ésta estalló, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mayoría de sus ayuntamientos, nos han asegurado que para combatirla es necesario aplicar una supuesta austeridad que consiste en rebajar impuestos, reducir el salario y número de los empleados públicos y transferir la mayoría de los servicios al sector privado para así, teóricamente, sanear la economía. Seis años después, el balance de todo ello es desastroso para el 99% de la población: la pobreza alcanza ya al 19,5%; se producen 80 desahucios al día; con 655 mil personas desempleadas y de ellas, más de 300 mil no tienen ya prestación. Por otro lado, los tributos, particularmente las tasas, no han dejado de subir. Hoy se paga por todo en Madrid. El continuo incremento de las tarifas de servicios básicos universales e imprescindibles como la electricidad, el agua o el transporte están poniendo en grave peligro su acceso para un importante número de familias y hogares. La política de privatizaciones está provocando un caos en la atención sanitaria, un alargamiento enorme de las listas de espera (miles de ellas sólo en mamografía) así como un desaprovechamiento de los recursos e inversiones previos. En los centros de estudio la situación no es mejor. La masificación en las aulas sigue aumentando; 1 de cada 2 familias ha renunciado a una plaza en escuela de Educación Infantil por no poderla pagar; 110 mil niños y niñas se han quedado sin beca de comedor y varios miles pasan hambre diariamente en las aulas; más de 300 mil han perdido las ayudas para las compras de libros de texto y material curricular, 20 mil jóvenes ya no tienen plaza en centros educativos; se han perdido varios miles de profesores en los últimos años y en las aulas faltan más de mil profesores con lo cual ya no puede garantizarse que en cada una de ellas haya un docente; las tasas universitarias siguen subiendo y las becas bajando, y miles alumnos no han podido pagar la tasa universitaria este año. En el campo de las políticas sociales se tiende, sin disimulo, a “permutar” derechos por la caridad. Hoy, más de 20.000 dependientes

siguen en el limbo y sin prestación, miles de inmigrantes han sido expulsados del Sistema Público Sanitario y a más de un centenar se les aplica un tratamiento carcelario por no “tener papeles” en el Centro de Internamiento de Aluche, un centro que no debería existir.

La supuesta principal razón de este sufrimiento y maltrato social era terminar con el déficit público y animar la inversión. El resultado no puede ser más contrario a tal objetivo. Hoy la inversión productiva huye, la pequeña empresa y el pequeño comercio están asfixiados y la deuda pública de la Comunidad de Madrid ha pasado en 5 años de ser de 6.800 millones de euros a 23 mil millones.

Podemos decir sin ambages que si las cosas no están todavía peor para la mayoría de nosotras y nosotros se debe, sobre todo, al esfuerzo del conjunto de la población. El actual gobierno de la Comunidad está renunciado a su papel. En una sociedad democrática el gobierno es de la ciudadanía y nace para proteger y desarrollar los derechos de la mayoría. Sus recursos están para trabajar por la mejora de la vida de las personas. La renuncia actual del gobierno autonómico y de la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad a ejercer esta tarea está degradando nuestras instituciones, sometiéndolas al simple interés de los más poderosos, alejándolas de la gente y sus necesidades, y favoreciendo procedimientos clientelares de los que no escapa una importante dosis de corrupción. Un modelo de desarrollo que hizo precisamente de las privatizaciones, el ladrillo y el desmantelamiento del tejido productivo una máxima en la época de la burbuja.

Ante esta crisis mayúscula necesitamos más ciudadanía. Por tal razón, llamamos también a la movilización y defensa de nuestros ayuntamientos como instrumentos básicos de nuestra democracia y a oponerse a la modificación de la actual Ley de Bases de Régimen Local que el gobierno de Rajoy acaba de remitir al parlamento. Dicha modificación, representa la práctica liquidación de 151 de los 179 ayuntamientos de nuestra comunidad y la pérdida de unos 30 mil puestos de trabajo. De aprobarse tal cual está, será el fin de toda la política social en los municipios y una vuelta de tuerca contra la ciudadanía y la democracia.

Por el actual camino aumenta el sufrimiento de la población, se disparan las diferencias sociales, se degrada la democracia, se pierden derechos y no se resuelve ni uno solo de los problemas que se querían afrontar.

Las entidades reunidas a propuesta de la Cumbre Social afirmamos que el principal capital de toda sociedad es su gente, que son las personas y sus necesidades el baremo con el que hay que medir la democracia, el desarrollo y el bienestar. Es la hora de poner en valor y en forma de propuestas aquello que la sociedad está reclamando en las calles, en los centros de trabajo, de estudio, sanitarios, a la puerta de los bancos o ante la sede del gobierno y los ayuntamientos.

Lo hacemos porque nuestra Comunidad tiene competencias sobre la inmensa mayoría de las medidas que afectan al día a día de las personas que en ella habitamos y por tanto, de la actuación de su gobierno depende una parte muy importante de cómo vivimos. Ante la crisis, queremos rescatar a las personas y sus necesidades, y por ello afirmamos, en nombre de la inmensa mayoría de la población de la Comunidad de Madrid, que el desmantelamiento de nuestros derechos y la democracia de baja intensidad que la acompaña deben terminar; como respuesta a ello y junto a la movilización social:

- ◆ **Queremos** una asistencia sanitaria de calidad, equitativa, universal, de gestión pública, financiada por los presupuestos y con carácter redistributivo.
- ◆ **Queremos** un sistema público de servicios sociales universal basado en el reconocimiento de derechos subjetivos, de base comunitaria e integral, centrado en la persona.
- ◆ **Queremos** ejercer nuestro derecho a la atención en situaciones de dependencia.

- ◆ **Queremos** una educación pública, universal, gratuita, equitativa, inclusiva, laica, participativa y democráticamente gestionada y, por tanto, de calidad.
- ◆ **Queremos** una Red de Centros Públicos que garantice un número de plazas igual o superior a la media de la necesidad de plazas escolares.
- ◆ **Queremos** que paren los desahucios y que se garantice el derecho a la vivienda
- ◆ **Queremos** que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas articulando mecanismos efectivos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
- ◆ **Queremos** políticas reales de empleo e inversión, un cambio de modelo productivo sobre la base del empleo de calidad y con derechos, la innovación de los productos y los servicios. Garantizar el papel de las Administraciones Públicas en la intermediación laboral.
- ◆ **Queremos** una planificación pública, transparente y participativa de los recursos y dinero público.
- ◆ **Queremos** que se ayude a cooperativas, pequeño comercio y aquellas iniciativas que precisamente más y mayor empleo pueden crear.
- ◆ **Queremos** que el tejido asociativo se fortalezca y que la participación ciudadana sea un hecho.
- ◆ **Queremos** que se desarrollen mecanismos de participación ciudadana para poder intervenir en la elaboración y asignación de los presupuestos.
- ◆ **Queremos** unos servicios públicos que garanticen nuestros derechos, que capitalicen nuestros impuestos, que den equidad e igualdad a nuestra sociedad, y que proyecten nuestra solidaridad con los pueblos empobrecidos del planeta.

- ◆ **Queremos** una política fiscal en la que pague el que más gane, basada en impuestos progresivos y directos.
- ◆ **Queremos** que se garantice el acceso universal al agua a través de mantenimiento bajo control público del Canal de Isabel II.
- ◆ **Queremos** un acceso a la energía basada en fuentes renovables y de proximidad y no en grandes infraestructuras que hoy sólo benefician a la especulación y ponen en riesgo la salud de las personas.
- ◆ **Queremos** la plena igualdad de derechos entre todas las personas.
- ◆ **Queremos** que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre todas las facetas de su vida y cuerpo. Garantizar el derecho al aborto y a la reproducción asistida.
- ◆ **Queremos** que se garantice la igualdad plena y efectiva de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).
- ◆ **Queremos** la supresión de las medidas que han sumido a Madrid en la mayor pobreza y degradación cultural nunca conocidas y especialmente la supresión del IVA cultural y la privatización de los espacios públicos.
- ◆ **Queremos** medidas que potencien el consumo socialmente responsable en sus vertientes ética y ecológica, un consumo que parta de la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar aquello que se usa.
- ◆ **Queremos** que se respeten los derechos de consumidores y consumidoras contra los abusos de los grandes oligopolios, los fraudes de la banca y su impunidad.
- ◆ **Queremos** la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y desapariciones del franquismo y apoyamos todas aquellas iniciativas tendentes a conseguirlo.
- ◆ **Queremos** que se garantice la participación real de la ciudadanía en la vida social, política y económica de la región, respetando el papel del conjunto de las organizaciones sociales para que puedan ejercer sus funciones de representación.

En resumen, queremos fortalecer la democracia y por ello afirmamos que las consecuencias de esta crisis y el sufrimiento social que producen no son un accidente, sino un proceso antidemocrático y antisocial basado en un modelo de pérdida de derechos que persigue un cambio de modelo social. Así la cumbre llama a toda la sociedad a seguir manteniendo esfuerzos a favor de los derechos de todas y todos, y se dirige a las fuerzas políticas de nuestra Comunidad para exigir que sea la defensa intereses y necesidades de la mayoría el principio rector de los presupuestos del próximo año, frente a una minoría que busca su propio beneficio y el de sus amistades, y a proyectos como Eurovegas, máximo exponente de una economía depredadora e insostenible que supone retroceso y pérdida de derechos.